

COMENTARIOS

¿HACIA DONDE VAMOS?

Noventa días parecen ser suficientes para que un nuevo gobierno imprima un ritmo, un estilo y una dirección a su gestión. En ellos empieza a decantarse cómo se pretende abordar la grave problemática nacional, se delimitan las cuestiones que a juicio del gobierno merecen atención urgente, se perfilan con mayor claridad las dificultades reales y las posibilidades objetivas de materializar las promesas electorales. ¿Qué puede decirse de hacia dónde va el país después de 90 días del nuevo gobierno democrata-cristiano?

Tras un trimestre de ejercicio, puede afirmarse que el PDC no tiene un programa político definido para el país. Si bien en algún momento se han formulado 4 grandes objetivos que supuestamente orientan a la acción gubernamental (pacificación, democratización, reactivación económica y respeto a los derechos humanos), las medidas de los primeros 90 días no parecen estar conduciendo al logro de éstos, ni están lo suficientemente articuladas como para sugerir una estrategia para empezar a resolver los graves problemas nacionales.

Respecto al cuarto de los objetivos, hay una serie de acciones altamente publicitadas, las cuales han intentado mostrar un creciente control del poder civil sobre la Fuerza Armada y que ello habría incidido en una "notable mejoría" cuantitativa en las violaciones a los derechos humanos. Entre las medidas adoptadas se señalan la transferencia de oficiales a quienes se les imputan vinculaciones con actividad paramilitar a puestos de combate, de menor prominencia o al exilio diplomático/académico; el desmantelamiento de la unidad de inteligencia de la

Policía de Hacienda, frecuentemente señalada como lugar desde el cual operaban los escuadrones de la muerte; la centralización del control de los cuerpos de seguridad en una nueva subsecretaría de seguridad, dependiente del ministerio de defensa, así como la reciente creación de una comisión investigadora de casos especiales.

Si bien estas acciones son potencialmente positivas, no queda claro que se trate efectivamente de un mayor control del poder civil sobre el militar, o que estén conduciendo a mejorar la situación de los derechos humanos. De hecho, la mayoría de los cambios militares se habrían dado sin la participación de Duarte. La Fuerza Armada ha mostrado durante el trimestre que sus decisiones son determinantes en ciertas áreas del quehacer político y económico. Evidencia de ello sería el haber revertido la decisión de enviar una misión oficial a las celebraciones del quinto aniversario de la revolución sandinista, y los intentos de la Fuerza Armada por establecer canales de comunicación con la contraparte militar insurgente, dejando por un lado a los sectores políticos de ambos bandos, y que a la fecha se habría materializado en varios intercambios de prisioneros.

Por otra parte, si ha habido una mejoría en cuanto al número de desapariciones y asesinatos atribuibles a los "escuadrones de la muerte," ésta parece responder más a las particulares condiciones imperantes en el país, que a una consecuencia directa de los cambios señalados. De hecho, las desapariciones y asesinatos, así como la actividad atribuida a los escuadrones de la muerte habría empezado a incrementarse a raíz de los anuncios de una posible ofensiva de envergadura

del FMLN. La misma comisión investigadora de casos especiales se anunció tras el atentado dinamitero contra un miembro del PDC, que Duarte atribuyó a los escuadrones.

Lo anterior no obsta para afirmar que la "luna de miel" con Washington le habría ayudado a Duarte en su relación con la Fuerza Armada, al menos en su margen de negociación, o que exista al interior de ciertos sectores de la oficialidad un nuevo nivel de conciencia respecto a la importancia y conveniencia de un comportamiento más político para con la población civil. Sin embargo, y desde un marco más global, la evidencia más contundente respecto a que la situación de derechos humanos en el país no mejora se encuentra en el creciente patrón de bombardeos y operativos masivos en el que las víctimas habrían sido mayoritariamente población civil. Tanto la Fuerza Armada como la embajada de Estados Unidos habrían calificado las zonas y las poblaciones afectadas como objetivos militares legítimos en tanto se sospecha que esta población es simpatizante del FMLN y, por lo tanto, guerrilleros potenciales, o atribuyen sus muertes a fuego cruzado entre combatientes.

En cuanto al objetivo de pacificación, no sólo no se ha avanzado en reducir los niveles del conflicto armado, sino de hecho se manifiestan signos de que la guerra está en un proceso de

ampliación geográfica e intensificación. El elemento más significativo para afirmar lo anterior se encuentra en la adopción por parte de Duarte del análisis y las tesis de la administración Reagan sobre el conflicto. Aduciendo que se debe a una invasión desde el exterior por un ejército entrenado y armado por gobiernos marxistas, concluye que el remedio está en el perfeccionamiento de la Fuerza Armada y en el aumento de su capacidad de lucha que permitan aplastar al FMLN o disminuirlo en forma tal que le obligaran a entrar en el juego electoral. Punto medular de este planteamiento es la necesidad de un nivel más alto de asistencia por parte de Estados Unidos "para sotener la paz."

El planteamiento habría tenido ya sus primeros efectos. Amén del incremento en ayuda militar norteamericana, destinada en su gran mayoría a la adquisición de equipo aéreo que aumentará la capacidad destructiva de la Fuerza Armada; del incremento en la tecnología sofisticada de guerra que ya se está utilizando y que ha traído como corolario una participación norteamericana más directa en la guerra misma; y de la intensificación de bombardeos y operativos de envergadura, la subordinación a los planteamientos de Washington ha significado un incremento en las tensiones entre El Salvador y Nicaragua. Y ésto no sólo porque Duarte ha llegado a dar su apoyo tácito al financiamiento de la CIA a



los grupos antisandinistas, argumentando que estos grupos en algo contribuyeron a detener el flujo de armas desde Nicaragua a los rebeldes salvadoreños, sino por la creciente evidencia de que El Salvador está jugando un papel importante como base de apoyo a los contrarrevolucionarios. Y respecto al diálogo con el FDR-FMLN, éste ha sido pospuesto hasta que se den en el país "las condiciones necesarias de seguridad" para llevarlo a cabo, lo que aleja las posibilidades de una solución política al conflicto.

En el terreno económico es en donde más evidente se ha hecho la ausencia de un programa definido. Y esto no sólo por la descoordinación entre los diferentes ministerios. Las medidas impulsadas durante el trimestre parecieran estar encaminadas más a consolidar al PDC en el poder que a resolver la grave crisis económica nacional, además de que éstas se habrían dado en la dirección que menos se esperaba; es decir, en sustanciales concesiones a la gran empresa privada y a algunos gremios agro-exportadores. Esto se ha facilitado porque hay un proyecto relativamente estructurado cuyos elementos centrales serían el calmar los temores de la derecha económica a fin de minimizar su potencial de desestabilización política, y el constituir al sector privado en el motor de la reactivación económica. De hecho, las principales medidas económicas impulsadas por el gobierno —transferencia masiva de algunas exportaciones tradicionales y de gran cantidad de no tradicionales al mercado paralelo, incremento en las tarifas de servicios públicos, y nuevos precios de garantía para el algodón y las cosechas de café— habrían sido impuestas y presionadas por AID como condición para el desembolso de 50 millones de dólares en ayuda económica.

La subordinación a Washington, el abandono de planteamientos fundamentales y los acercamientos hacia el sector privado sin medidas equiparables que ayuden a paliar el deterioro en las condiciones de vida del sector laboral parecen estar generando divisiones al interior del PDC, así como alguna erosión en su base de apoyo social. El principal emplazamiento habría venido hasta el momento por parte de la UPD, cuyos reclamos principales vendrían por la línea del abandono de las gestiones políticas para ponerle fin a la guerra, el olvido en que ha caído la reforma agraria, y la insuficiencia de los aumentos generales al sector público como única medida de beneficio para los trabajadores.

Pero además de estos resquebrajamiento en el pacto social, al interior del mismo partido se estarían manifestando fuertes tensiones. El punto de discrepancia se centraría en torno al problema de la reactivación económica y la complementariedad de acciones políticas que ello requiere. Mientras un sector parece dispuesto a aceptar la tesis norteamericana de la empresa privada como motor de la reactivación y la necesidad de asegurar militarmente los espacios políticos para que ésta pueda darse, otra línea está sugiriendo que la distribución equitativa de los costos de la guerra es tarea prioritaria y que la forma como se le ponga fin a la guerra determinará las posibilidades y direcciones principales de esa reactivación. Unido a lo anterior, existen algunas evidencias de que se están realizando esfuerzos por constituir un nuevo partido político que intentaría "rescatar los principios social-cristianos."

Pero incluso suponiendo la unidad al interior del partido, la existencia de un programa definido y el apoyo incondicional de Estados Unidos a las propuestas del PDC, el gobierno tendría que enfrentar la oposición formal de la asamblea legislativa la cual, en este primer trimestre, ha mostrado que desde ese foro puede neutralizar o entorpecer cualquier iniciativa que considere contraria a sus intereses.

Sólo en el terreno internacional parece haber habido avances significativos. Puede afirmarse que el nuevo gobierno ha ampliado su espacio político internacional con el restablecimiento de relaciones internacionales interrumpidas desde 1980, y con los flujos concomitantes, aunque cautelosos, de ayuda técnica y económica. No obstante, la ampliación parece ser más resultado de la credibilidad internacional de Duarte y de la expectativa en ciertas naciones europeas que su elección conduciría a una solución del conflicto, que de la evaluación objetiva del primer trimestre de gobierno. No puede, por lo tanto, interpretarse como un cheque en blanco al gobierno y, de hecho, podría empezar a erosionarse de no registrarse avances sustantivos en algunas áreas críticas.

Así, después del primer trimestre, el gobierno de Duarte parece haber dedicado más tiempo, recursos y esfuerzos a "cambiar imágenes," sin que pueda verse claramente que éstos respondan, conlleven o conduzcan a transformaciones de la angustiante realidad nacional. La falta de un



programa definido para el país ha resultado en un mayor grado de subordinación a Washington, y en un acercamiento a la derecha salvadoreña, lo que le empieza a significar alguna erosión en su base de apoyo social. Se han alejado las posibilidades de una solución política al conflicto mientras que se han incrementado las posibilidades de una profundización y ampliación de la

guerra. Todo ello ha sucedido en el primer trimestre, en el cual las diferentes fuerzas sociales habrían dado algún compás de espera para medir la fuerza y decisión del nuevo gobierno, así como su dirección fundamental. Puede esperarse que, de aquí en adelante, las cosas vayan a peor.

C.I.D.A.I